



Tim Hirschel-Burns *es el enlace de políticas para la Iniciativa de Gobernanza Económica Global (GEGI) en el Centro de Políticas para el Desarrollo Global de la Universidad de Boston, centrándose en la financiación para el desarrollo, la estabilidad financiera y el comercio y la inversión. Realiza un seguimiento a los procesos de políticas en las instituciones de Bretton Woods, la ONU y el G20, colaborando con los responsables de la formulación de políticas, los laboratorios de ideas y la sociedad civil. Sus escritos han aparecido en Foreign Policy, Just Security, y otros medios, y sus análisis en The New York Times, The Washington Post, The Guardian, y la BBC. Anteriormente, fue becario de Bernstein en Derechos Humanos Internacionales junto con Oxfam América. Tim tiene un doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de Yale, una licenciatura de Swarthmore College, y prestó sus servicios como voluntario del Cuerpo de Paz en Benín.*

Desfinanciación de la Amazonía

MAPEO DEL RIESGO DE LA SCIE EN EL SECTOR DEL PETRÓLEO Y EL GAS EN LOS PAÍSES AMAZÓNICOS

TIM HIRSCHEL-BURNS, RACHEL TRASHER Y FIORELLA PAREDES*

RESUMEN EJECUTIVO

La protección de la Amazonía es un tema central de la 30.ª Conferencia de las Partes (COP30) en Belém, Brasil. Teniendo muy presente que los sistemas económicos actuales hacen que sea más rentable talar bosques que conservarlos, Brasil ha propuesto un Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales (*Tropical Forests Forever Facility*, TFFF) que proporcione a las naciones con bosques tropicales una fuente sostenible de ingresos que incentive la protección de los bosques. Sin embargo, los esfuerzos para garantizar que la Amazonía sea *defendida* corren más bien el riesgo de ser *desfinanciados* por el sistema de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (SCIE).

Consagrada en tratados internacionales de inversión, la SCIE otorga a los inversores extranjeros un derecho especial a demandar a los gobiernos en tribunales arbitrales por daños y perjuicios al valor de sus inversiones. Esta situación plantea un problema para los gobiernos de la región amazónica que protegen la Amazonía. La extracción de petróleo y gas es el principal factor que contribuye directamente a la deforestación mediante la notable presencia de proyectos de petróleo y gas en los países ubicados en la Amazonía, y también contribuye al cambio climático que a su vez amenaza a

* **Agradecimientos:** También quisiéramos agradecer a Rebecca Ray por sus valiosos comentarios y apoyo en cuanto a las cifras. Gracias asimismo al equipo de *Global Energy Monitor* por la creación y mantenimiento de los datos de *Global Oil and Gas Extraction Tracker*, GOGET, que hicieron posible este informe de políticas, y en particular a Scott Zimmerman por sus detalladas respuestas a nuestras preguntas sobre los datos.



Rachel Thrasher *es investigadora con la Iniciativa de Gobernanza Económica Global y actúa como jefe de equipo para la línea de trabajo de las Normas de Comercio e Inversión en el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston. Tiene un doctorado en derecho y una maestría en Relaciones Internacionales, ambas de la Universidad de Boston. Trabaja en cuestiones de políticas relacionadas con acuerdos comerciales y de inversión, los espacios políticos para el desarrollo, la propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos y los impactos ambientales de los tratados de comercio e inversión. Es autora del libro "Constraining Development: The Shrinking of Policy Space in the International Trade Regime", publicado por Anthem Press en 2021. Actualmente enseña Regulación del Comercio Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston.*

la selva amazónica. Como consecuencia de ello, estos gobiernos tendrán que introducir políticas que limiten esa actividad. Sin embargo, las políticas que limitan la extracción de petróleo y gas podrían dar lugar a reclamaciones de la SCIE por parte de empresas de combustibles fósiles cuyos beneficios dependen de la deforestación conexa. En los países de la Amazonía existen abundantes pruebas de reclamaciones de la SCIE por petróleo y gas que ascienden a cientos de millones o incluso miles de millones de dólares, y la responsabilidad legal por la SCIE amenaza con cancelar las contribuciones financieras de fuentes como el TFFF (Tienhaara et al. 2022a, 2022b).

Este informe de políticas proporciona un mapeo nunca antes disponible del riesgo de SCIE en el sector del petróleo y el gas en los ocho países que comparten la Amazonía: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Explica por qué la SCIE representa una amenaza para los países de la Amazonía y proporciona datos cuantitativos sobre la vulnerabilidad de cada país a la SCIE. Si bien esta vulnerabilidad es significativa, este informe de políticas también muestra que estos países pueden aprender uno del otro sobre las experiencias an protegerse de la SCIE. En este aspecto, el país anfitrión de la COP30, Brasil, lleva el liderazgo. Al evitar los tratados de inversión sujetos a la SCIE, Brasil se ha garantizado un espacio político para promover la conservación y el desarrollo, protegiéndose de esta manera potencialmente de miles de millones de dólares en obligaciones legales.

Principales hallazgos:

- 218 proyectos de petróleo y gas en países de la Amazonía están cubiertos por disposiciones de la SCIE en tratados de inversión, teniendo Colombia el mayor número de proyectos cubiertos por la SCIE de cualquier país.
- En los países de la Amazonía, por lo menos 26.500 millones de barriles equivalentes de petróleo, BEP, están cubiertos por provisiones de la SCIE, siendo Venezuela el país con la mayor cantidad de reservas cubiertas por la SCIE de cualquier país.
- Los países de la Amazonía con mayor proporción de sus proyectos de petróleo y gas expuestos a la SCIE son Guyana (96%), Colombia (45%) y Perú (42%).
- Debido a que han evitado casi por completo la firma de tratados de inversión con la SCIE, Brasil y Suriname no están expuestos a la SCIE en sus sectores del petróleo y el gas. Las decisiones de Ecuador y Bolivia de rescindir sus tratados de inversión limitarán su responsabilidad legal futura, pero en el presente continúan expuestos debido a las cláusulas de extinción de esos tratados.

Recomendaciones relativas a políticas clave:

- En primer lugar, los países de la Amazonía deben abstenerse de firmar nuevos tratados de inversión que incluyan cláusulas relacionadas con SCIE.
- Los países de la Amazonía deberían retirarse de los tratados de inversión existentes que incluyan SCIE.
- Las partes en cada tratado deben trabajar con los países de la Amazonía para invalidar las disposiciones de la SCIE en sus tratados de inversión compartida.

Si bien los gobiernos se centran justificadamente en la protección de la Amazonía en la COP30, no deben pasar por alto la significativa amenaza que representa la SCIE no sólo para los países amazónicos, sino también para los países de todo el mundo que se benefician de la contribución de la selva amazónica a los bienes públicos globales.



INTRODUCCIÓN



Fiorella Paredes *es Asistente de Investigación en el Centro de Políticas para el Desarrollo Global de la Universidad de Boston, actualmente dedicada a temas relacionados con China y América Latina y el Caribe. Es estudiante de pregrado en Relaciones Internacionales y Economía.*

En la 30.ª Conferencia de las Partes (COP30) en Belém, Brasil, la Amazonía estará, con sobrada razón, en el primer lugar de la agenda. La Amazonía almacena el carbono equivalente a las emisiones de dióxido de carbono en un período entre 15 a 20 años. También alberga el 10 por ciento de la biodiversidad mundial y muchos pueblos indígenas (Flores 2024). Sin embargo, este bosque vital está amenazado. Aproximadamente una quinta parte de la Amazonía ya ha sido deforestada (*Science Panel for the Amazon 2021*), en tanto que las tasas de degradación también son altas (Mataveli 2025).

La falta de apoyo a los países de la Amazonía es una de las principales razones por las que el bosque amazónico no ha sido suficientemente protegido. Los países de la Amazonía que conservan esta vital región contribuyen con un servicio que beneficia al resto del mundo, y el apoyo externo puede asegurar que los países sean capaces de proteger el bosque al tiempo que satisfacen sus importantes necesidades de desarrollo. Esta idea es la razón de ser del Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales (Tropical Forests Forever Facility, TFFF), una de las iniciativas emblemáticas de Brasil para la COP30. A través de la rentabilidad sobre una base de capital, el TFFF tiene la intención de pagar a los países alrededor de 4 dólares por hectárea de bosque conservado (Tropical Forests Forever Facility 2025). Este modelo garantizaría que los países con bosques tropicales —en la zona de la Amazonía y en otros lugares— reciban una fuente de financiación sostenible e incentivos para proteger los bosques.

Esta iniciativa de pagar a los países por la conservación de los bosques es valiosa. Sin embargo, la situación actual no es sólo que los países de la Amazonía no reciben beneficios financieros para proteger la Amazonía, sino que, en muchos casos, esta protección podría acarrearles costos significativos, lo que mermaría los fondos destinados a la conservación. Una fuente importante de este riesgo es la llamada Solución de Controversias entre Inversores y Estados (SCIE).

Muchos tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados de libre comercio (TLC) incluyen disposiciones en la SCIE que otorgan un derecho especial a los inversionistas extranjeros de los países cobijados por el tratado a demandar para proteger el valor de sus inversiones (Columbia Center on Sustainable Investment 2022). Estos casos no tienen lugar en tribunales nacionales ordinarios, sino más bien en tribunales arbitrales que con frecuencia carecen de transparencia y pueden plantear problemas de conflicto de intereses en la selección de arbitradores privados (Tucker 2018). Los acuerdos de inversión incluyen disposiciones que limitan el poder regulador del Estado a través de normas de no discriminación, reglas que requieren compensación por la nacionalización "indirecta" y el principio de "trato justo y equitativo". Los tribunales arbitrales también han adoptado una interpretación amplia de las disposiciones subyacentes que tienen en cuenta no sólo los intereses del Estado sino también las "expectativas legítimas" del inversor (Arcuri 2024). Como resultado, tenemos que las políticas públicas legítimas, como las que utilizan los países de la Amazonía para proteger la selva amazónica o promover el desarrollo económico, pueden resultar en la concesión de importantes indemnizaciones otorgadas a los inversores extranjeros (Paparinskis 2021). Si bien la justificación de la SCIE es que aumentará la inversión extranjera, décadas de dependencia de las disposiciones de la SCIE no han logrado generar pruebas consistentes de que tenga algún efecto de ese tipo (Brada 2021).

La SCIE amenaza con cancelar el apoyo a la conservación, castigando a los países por políticas que son beneficiosas desde el punto de vista ambiental y social que contribuyen a un bien público mundial. Por ejemplo, si se detuviera completamente la deforestación, un análisis independiente prevé que Perú y Colombia recibirían pagos anuales del TFFF de 292 y 272 millones de dólares, respectivamente (Plant for the Planet 2025). Sin embargo, las políticas que pongan fin con éxito a la deforestación podrían desencadenar casos de SCIE por valor de miles de millones de dólares. La

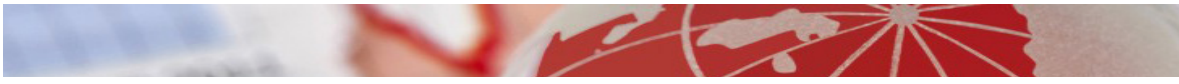
reclamación promedio de SCIE de 2014 a 2023 fue de 1.100 millones de dólares (UNCTAD 2024), y los países de la Amazonía se han enfrentado a juicios multimillonarios en casos de petróleo y gas, como una sentencia de 1.700 millones de dólares contra Ecuador y una sentencia de 8.500 millones de dólares contra Venezuela (Occidental contra Ecuador II; ConocoPhillips contra Venezuela). A nivel global, tomar medidas para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados podría acarrear para los gobiernos hasta 340.000 millones de dólares en responsabilidad legal por la SCIE a los inversores de petróleo y gas (Tienhaara 2022a).

Sin embargo, no todos los países de la Amazonía son vulnerables a esta amenaza. Si bien Brasil firmó acuerdos internacionales de inversión que contenían SCIE en la década de 1990, la oposición de larga data en el Congreso de Brasil significó que nunca entraron en vigor. Suriname se abstuvo en gran medida de firmar acuerdos internacionales de inversión y sólo uno está en vigor. La preocupación por la SCIE llevó a Ecuador y Bolivia a rescindir sus acuerdos de inversión, aunque las cláusulas de extinción que mantienen la SCIE en vigor por un tiempo fijo significan que ambos países siguen enfrentando la responsabilidad legal por la SCIE. En contraste con otros países de la Amazonía que han reducido su exposición a la SCIE, cuatro países —Colombia, Guyana, Perú y Venezuela— no tienen protección contra la SCIE.

POR QUÉ LA SCIE EN EL SECTOR DEL PETRÓLEO Y EL GAS ES UNA AMENAZA PARA LOS PAÍSES DE LA AMAZONÍA

La SCIE en el sector del petróleo y el gas plantea riesgos específicos para la protección de la selva amazónica y el desarrollo económico de los países de la Amazonía. Mientras que la extracción de petróleo y gas de algunos países es principalmente en alta mar (off-shore) o en tierra (on-shore) pero fuera de la selva amazónica, los bloques petroleros y gasíferos cubren unas tres cuartas partes de la Amazonía peruana (Lessmann 2016), dos tercios de la Amazonía ecuatoriana (International Work Group for Indigenous Affairs 2025) y casi un tercio de la Amazonía colombiana (Earth Insight 2025). No sólo existe una importante superposición geográfica entre la actividad petrolera y gasífera y la selva amazónica, sino que la inversión extranjera prevalece particularmente en este sector del petróleo y el gas, lo cual aumenta el riesgo de reclamaciones de la SCIE. Según datos del *Global Oil and Gas Extraction Tracker*, Brasil tiene el porcentaje más bajo de propiedad extranjera entre los países de la Amazonía, con un 19 por ciento de los proyectos de petróleo y gas que tienen al menos un propietario extranjero. En el otro extremo del espectro, el 68 por ciento de los proyectos de petróleo y gas en Perú, el 83 por ciento de los proyectos en Suriname y el 100 por ciento de los proyectos en Guyana, tienen al menos un propietario extranjero. La industria de combustibles fósiles es también el usuario más activo del sistema SCIE entre todos los sectores (International Institute for Sustainable Development 2022).

Este contexto plantea múltiples riesgos significativos para los países de la Amazonía, tanto a través de la responsabilidad financiera que la SCIE podría imponer a los gobiernos como a través de un 'enfriamiento regulatorio' que puede impedir que los gobiernos tomen medidas en primer lugar por temor a las reclamaciones de SCIE (Tienhaara 2017). En primer lugar, la SCIE puede limitar la capacidad de un gobierno para reducir o detener la extracción de petróleo y gas con el fin de limitar la deforestación directa y otros daños ambientales. Uno de los riesgos más graves para los bosques proviene de las carreteras de acceso, que a menudo se trazan a través de secciones extendidas de bosque intacto con el fin de llegar a zonas aisladas donde se encuentra el petróleo y el gas (Finer 2008). Estas carreteras contribuyen a la fragmentación del hábitat, y su construcción a menudo actúa como catalizador de la tala, la caza y los asentamientos humanos que conducen a una mayor



deforestación (Finer 2008). Las operaciones de petróleo y gas, incluidas las pruebas sísmicas, la perforación exploratoria y la construcción de oleoductos, también pueden conducir a la tala forestal (Humphreys Bebbington 2018). Además, los proyectos de petróleo y gas en la Amazonía han producido en repetidas ocasiones derrames de petróleo y otras formas de contaminación (Finer 2008). Las medidas de protección ambiental, como la prohibición de la extracción de petróleo y gas en las regiones amazónicas o la prohibición de la construcción de carreteras de acceso a través de zonas sensibles, podrían potencialmente provocar reclamaciones de la SCIE por parte de los inversores extranjeros argumentando que estas políticas socavan el valor de su inversión. Este tipo de políticas ya han sido cuestionadas en el contexto de la prohibición que hizo Italia de perforar petróleo en alta mar, así como en el contexto de los intentos de Colombia de delimitar su región de páramos para preservar áreas ambientales sensibles y proteger los sumideros naturales de carbono. Ambos países enfrentaron (y perdieron) reclamaciones contra sus procesos de políticas nacionales (Rockhopper contra Italia; Eco Oro contra Colombia).

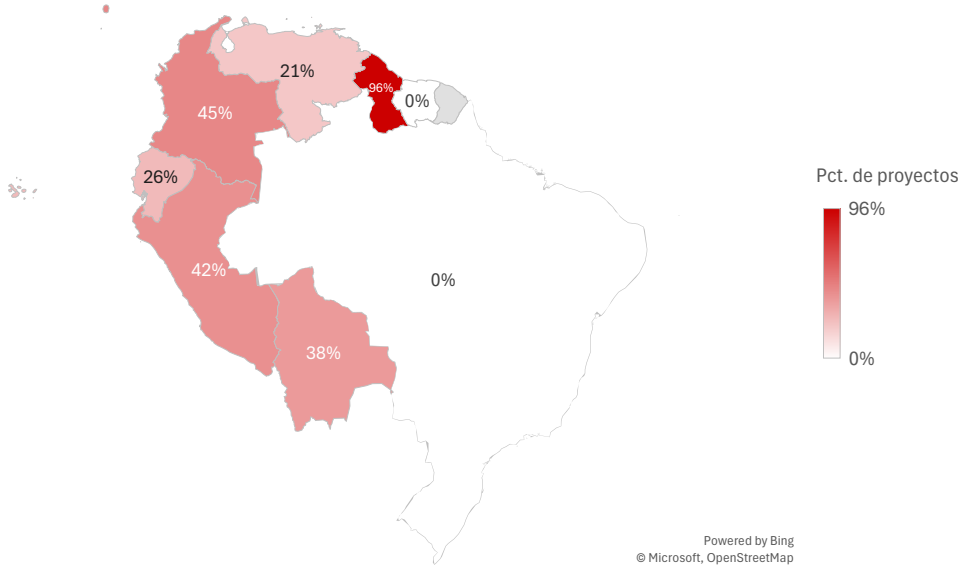
En segundo lugar, además de los impactos locales directos de la extracción de petróleo y gas, ésta también contribuye al cambio climático que inflige daños a la Amazonía y al mundo en su conjunto. En un escenario de emisiones netas cero de la Agencia Internacional de Energía para 2050, no habría nuevos proyectos de petróleo y gas iniciados en ningún lugar (Agencia Internacional de Energía 2025). En 2023, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones en materia de derechos humanos, en cuanto hace al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, publicó un informe sobre las "consecuencias catastróficas de la solución de controversias entre inversores y Estados para la acción climática y medioambiental" (Boyd 2023). A pesar de las justificaciones climáticas para la eliminación gradual de la extracción de combustibles fósiles, la SCIE crea un sesgo a favor de las industrias de petróleo y gas existentes. Como consecuencia de ello, las políticas que buscan limitar la extracción de petróleo y gas podrían conducir a una responsabilidad legal por la SCIE que exige a los gobiernos pagar daños a los inversores extranjeros, es decir, esencialmente produciendo financiamiento para el clima, pero a la inversa (Tienhaara 2022a).

En tercer lugar, incluso para los países que están comprometidos con la extracción de petróleo y gas, la SCIE limita su capacidad de maximizar sus beneficios provenientes de sus recursos de hidrocarburos. Las políticas como el aumento del control estatal sobre el sector del petróleo y el gas, el aumento de impuestos, los requisitos de intercambio de conocimientos o tecnología o la renegociación de contratos podrían potencialmente generar responsabilidades legales en materia de SCIE. En varios países de la Amazonía, los proyectos de petróleo y gas generan ingresos insuficientes, producen pocos efectos secundarios positivos para la economía en general o contribuyen a los ciclos de bonanza y quiebra que amenazan la estabilidad financiera. La SCIE ofrece a estos países la posibilidad de elegir entre continuar con las manos atadas o arriesgarse a grandes responsabilidades legales por la SCIE.

MAPEO DE LA EXPOSICIÓN A LA SCIE EN EL SECTOR DEL PETRÓLEO Y EL GAS

El análisis de los datos disponibles muestra que los países de la Amazonía se enfrentan a un riesgo significativo de casos de SCIE y que las políticas que se adopten ahora pueden limitar con éxito el riesgo de SCIE. El gráfico 1 muestra la proporción de proyectos de petróleo y gas de cada país que están cubiertos por la SCIE.

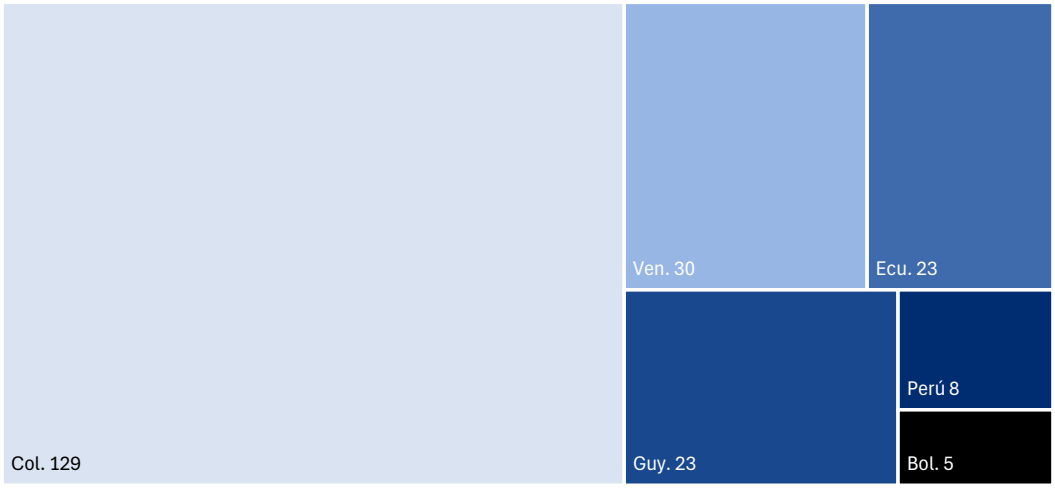
Gráfico 1: Proporción de proyectos de petróleo y gas cubiertos por SCIE, por país



Fuente: GOGET 2025 y cálculos de los autores.

En total, el análisis muestra 218 proyectos claramente definidos de petróleo y gas en países de la Amazonía para los cuales al menos un propietario puede recurrir a la SCIE en virtud de un acuerdo de inversión internacional (AII) en vigor. Este número asciende al 35 por ciento de los proyectos de petróleo y gas amazónicos en los datos analizados. En el gráfico 2 que figura a continuación se muestra la distribución por países. Esta cifra podría no reflejar plenamente el impacto de la SCIE en la región, ya que el 'enfriamiento regulatorio', es decir, la renuencia de los gobiernos a regular, derivado de la proporción de proyectos cubiertos por la SCIE, podría disuadir a los gobiernos de aplicar políticas que sean de aplicabilidad general.

Gráfico 2: Número total de proyectos de petróleo y gas expuestos a SCIE por país

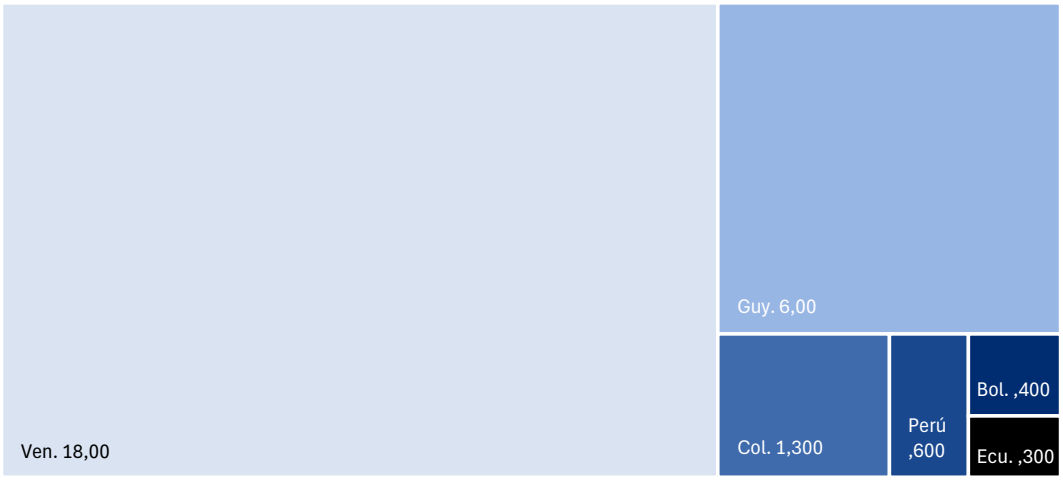


Fuente: GOGET 2025 y cálculos de los autores.
Nota: Brasil y Suriname no se muestran, ya que cada uno de ellos tiene una exposición nula a la SCIE.

El análisis también concluye que los proyectos de petróleo y gas de los países de la Amazonía cubiertos por la SCIE contienen al menos 26.500 millones de barriles equivalentes de petróleo (BEP). De esas reservas, el 95 por ciento proviene del petróleo y otros combustibles líquidos y sólo el 5 por

ciento proviene del gas, lo que refleja la naturaleza rica en petróleo en las reservas de combustibles fósiles de los países de la Amazonía. Venezuela y Guyana tienen las mayores reservas cubiertas por la SCIE de los países de la Amazonía. En el apéndice I se ofrece una visión general país por país de cómo están expuestos a la SCIE.

Gráfico 3: Reservas de petróleo y gas expuestas a la SCIE por país (miles de millones de barriles equivalentes de petróleo)



Fuente: GOGET 2025 y cálculos de los autores.

Nota: Brasil y Suriname no se muestran, ya que cada uno de ellos tiene una exposición nula a SCIE. Es probable que las cifras de Colombia y Ecuador sean subestimadas significativamente debido a las limitaciones de los datos.

La variación entre los países demuestra el impacto de las decisiones en torno a políticas nacionales. Brasil y Suriname no están expuestos a la SCIE en su sector del petróleo y el gas porque han evitado casi por completo la firma de acuerdos de inversión que incluyan disposiciones al respecto. En contraste, los tres países de la Amazonía con mayor número de acuerdos de inversión con disposiciones de la SCIE (Perú, Venezuela y Colombia) están expuestos en el 42, 21 y 45 por ciento de sus proyectos de petróleo y gas, respectivamente, para un total de 167 proyectos. Estos resultados no sugieren que si no se incluyen las disposiciones de la SCIE entonces se desestimula la inversión extranjera. Una proporción similar de los proyectos de petróleo y gas de Suriname y de Guyana son de propiedad extranjera, pero Suriname no tiene exposición a la SCIE en el sector, mientras que la exposición de Guyana es la más alta de cualquier país amazónico con un 96 por ciento. Mientras que Ecuador y Bolivia aún enfrentarán la exposición a la SCIE a finales de la década de 2020 y mediados de la década de 2030 debido a las cláusulas de extinción en sus tratados de inversión, su decisión de poner fin a estos tratados los eximirá de su responsabilidad legal al término de ese período.

Vale la pena explorar varios enfoques diferentes para medir el riesgo. En términos de amenazas a la conservación de la Amazonía, la exposición a la SCIE en Perú probablemente crea el mayor riesgo. Perú tiene la segunda mayor parte de la Amazonía de cualquier país, donde los bloques de petróleo y gas cubren unas tres cuartas partes de la Amazonía peruana y el 42 por ciento de los proyectos de petróleo y gas en este país tienen propietarios con recurso a la SCIE (International Work Group on Indigenous Affairs 2025). Como se muestra en el gráfico 2, a continuación, Colombia tiene, con mucho, el mayor número de proyectos de petróleo y gas expuestos a la SCIE —lo que representa el 59 por ciento de la cobertura de la SCIE para estos proyectos en los países de la Amazonía— y su ambiciosa política ambiental podría ponerlo en un riesgo particular de que los inversores presenten costosas reclamaciones de SCIE. En Guyana, el riesgo de responsabilidad legal por la SCIE es muy elevado en relación con el tamaño de su economía, ya que el petróleo y el gas dominan su economía

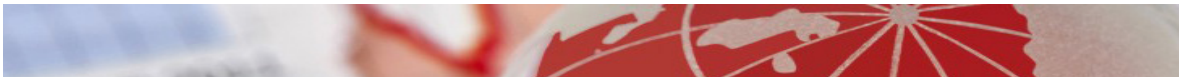
y el 96 por ciento de los proyectos de petróleo y gas están cubiertos por las disposiciones de la SCIE (World Bank 2025). En nuestro conjunto de datos, Venezuela tiene de lejos las mayores reservas de petróleo y gas expuestas a la SCIE entre los países de la Amazonía, como se muestra en el gráfico 3, arriba. Sin embargo, cabe señalar que Venezuela tiene bajos niveles de producción de hidrocarburos en relación con el tamaño de sus reservas, y su situación política crea dinámicas distintas (Aray 2024).

En el apéndice II se detalla la metodología utilizada para producir estas cifras, que deben interpretarse con cautela. Gran parte de los datos sobre propietarios son de 2023 o anteriores. La propiedad pudo haber cambiado desde entonces, y a medida que cambia la nacionalidad de los propietarios de un proyecto, también cambia la aplicabilidad de los AII. Algunos datos sobre los propietarios estaban incompletos, y las hipótesis utilizadas para completarlos tenderían a subestimar el grado de exposición a la SCIE. Los datos de las reservas utilizados en este informe de políticas se enfrentaron a desafíos particulares. Una parte significativa de los proyectos ecuatorianos y colombianos carecía de datos de reservas, lo que significa que las cifras de reservas se refieren a reservas mínimas basadas en datos confirmados en lugar de estimaciones completas. Sin embargo, la naturaleza de los datos sobre las reservas podría sesgarse hacia las sobreestimaciones, es decir, se informa bajo una amplia gama de definiciones, y si bien el análisis utilizó un enfoque conservador, muchas cifras se basan en definiciones más amplias que las reservas probadas.

PASAR DE DESFINANCIAR LA AMAZONÍA A DEFENDERLA

Al acoger la COP30 en un país amazónico y abogar por los esfuerzos de conservación como el TFFF, Brasil está demostrando su compromiso con la defensa de la Amazonía. Brasil es también un ejemplo a seguir de una manera diferente: al apartarse de los acuerdos internacionales de inversión con cláusulas de la SCIE, se ha garantizado un espacio para regular en favor de la protección de la selva amazónica. Esta decisión política ha librado a Brasil de los potencialmente miles de millones de dólares en responsabilidad que podrían resultar de las reclamaciones de la SCIE por parte de los inversionistas de petróleo y gas que argumentan que las políticas ambientales de Brasil perjudican el valor de sus inversiones.

La mayoría de los demás países de la Amazonía se encuentran en una posición mucho más débil. El gobierno de Colombia ha asumido el compromiso de proteger el medio ambiente y a eliminar gradualmente los combustibles fósiles (Fossil Fuel Treaty Initiative 2025), pero cuenta con 129 proyectos de petróleo y gas con propietarios que podrían presentar reclamaciones de la SCIE contra el país. Perú podría recibir hasta 292 millones de dólares en pagos anuales del TFFF si cesa la deforestación, pero con el 42 por ciento de su sector de petróleo y gas y 565 millones de barriles equivalentes de petróleo, BEP, bajo el régimen de la SCIE, las medidas oficiales que se requerirían para detener la deforestación podrían ser rápidamente eclipsadas por reclamaciones de la SCIE de inversionistas de petróleo y gas cuyo modelo de negocio depende de la deforestación (Plantilla para el Planeta 2025). La lógica del TFFF —que los países se comprometerán con la deforestación una vez que sea más rentable conservar los bosques que talarlos— podría ser anulada por la SCIE. Incluso para los países amazónicos que están firmemente comprometidos con la extracción de petróleo y gas, la SCIE limita su capacidad de captar más valor de sus recursos de hidrocarburos y corregir un status quo que a menudo está sesgado contra los estados anfitriones.



Tres políticas de control son esenciales para apoyar la conservación y el desarrollo en los países de la Amazonía. En primer lugar, los países de la Amazonía deben abstenerse de firmar nuevos tratados de inversión con disposiciones de la SCIE. En un contexto de inestabilidad del comercio mundial impulsado por los aranceles de los Estados Unidos, los países pueden verse tentados a precipitarse hacia nuevos acuerdos de comercio e inversión a fin de tener acceso a nuevos mercados. Sin embargo, los tratados que contienen SCIE podrían generar costos futuros importantes para el país, y una vez que los tratados de inversión entren en vigor, es un proceso largo y complicado para desbloquearlos. A medida que los países realizan sus análisis costo-beneficio, deben recordar que la SCIE no ha demostrado que ayuda a aumentar la inversión extranjera (Brada 2020).

En segundo lugar, los países deben seguir el ejemplo del Ecuador y Bolivia y retirarse de los acuerdos de inversión existentes que incluyan disposiciones de la SCIE. Si bien las cláusulas de extinción podrían mantener los tratados en vigor durante un período determinado después de su retiro, esta decisión limitaría la responsabilidad futura. La conservación de la Amazonía es un proceso continuo y el ciclo de vida de los proyectos de petróleo y gas puede abarcar décadas desde la exploración hasta el desmantelamiento, lo que significa que eliminar la posibilidad de reclamaciones de la SCIE diez o veinte años en el futuro bien merece la pena. La previsión que tuvo en el pasado Ecuador significa que está a menos de tres años de la expiración de su TBI con China, un cambio que pondrá fin a su vulnerabilidad a las reclamaciones de la SCIE en 14 de los 23 proyectos de petróleo y gas que hoy están cubiertos por la SCIE.

En tercer lugar, las partes en cada tratado deben trabajar con los países de la Amazonía para invalidar las disposiciones de la SCIE. Si bien la retirada unilateral desencadena la cláusula de extinción de los tratados de inversión, los acuerdos negociados, como la retirada mutua, pueden estipular que la cláusula de extinción no se aplicará (Mehranvar 2024). Los países de la Unión Europea y el Reino Unido deberían ser especialmente receptivos a estos acuerdos. Estos países abandonaron el Tratado de la Carta de la Energía debido en parte a la incompatibilidad del Tratado (y sus disposiciones sobre la SCIE) con el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo (European Commission 2024). Limitar su propia exposición a la SCIE al tiempo que se mantiene vigente con los países de la Amazonía es a la vez contraproducente para esos compromisos y parece mostrar un doble rasero. Además, los gobiernos y los inversores institucionales que patrocinan el TFFF no querrán que sus contribuciones se redistribuyan para pagar las indemnizaciones por la SCIE. Lamentablemente, el statu quo permite que ese riesgo sea demasiado factible: las mismas medidas de protección de la Amazonía necesarias para obtener pagos del TFFF podrían generar reclamaciones exitosas de SCIE que, en última instancia, requieren que los gobiernos utilicen sus pagos del TFFF para compensar a los inversores extranjeros.

La COP30 es la ocasión propicia para que los países se unan en torno a la protección de la Amazonía. Esta causa apunta a desarticular el potencial que tiene la SCIE para provocar graves daños.



REFERENCIAS

Aray, Henry and David Vera. 2023. "A Tale of Oil Production Collapse." *Resources Policy* 93. https://doi.org/10.2139/ssrn.4554274.

Arcuri, Alessandra, Kyla Tienhaara and Lorenzo Pellegrini. 2024. "Investment Law V. Supply-Side Climate Policies: Insights from Rockhopper v. Italy and Lone Pine v. Canada." *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 24(1): 193–216. https://doi.org/10.1007/s10784-023-09622-w.

Boyd, David R. 2023. *Paying Polluters: The Catastrophic Consequences of Investor-State Dispute Settlement for Climate and Environment Action and Human Rights*. A/78/168.

BP. 2021. *Approximate Conversion Factors. Statistical Review of World Energy*. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-approximate-conversion-factors.pdf.

Brada, Josef C., Zdenek Drabek and Ichiro Iwasaki. 2020. "Does Investor Protection Increase Foreign Direct Investment? A Meta-analysis." *Journal of Economic Surveys* 35(1): 34–70. https://doi.org/10.1111/joes.12392.

ConocoPhillips v. Venezuela. 2019. *ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela* (ICSID Case No. ARB/07/30).

Columbia Center on Sustainable Investment. 2022. *Primer on International Investment Treaties and Investor-State Dispute Settlement*. https://ccsi.columbia.edu/content/primer-international-investment-treaties-and-investor-state-dispute-settlement.

Earth Insight, International Institute for Sustainable Development and Organización Nacional de los Pueblos Indigenas de la Amazonia Colombiana. 2025. *Oil and Gas Expansion in the Colombian Amazon: Navigating Risks, Economics and Pathways to a Sustainable Future*. https://earth-insight.org/report/colombian-amazon-oil-gas/.

Eco Oro v. Colombia. 2024. *Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia* (ICSID Case No. ARB/16/41).

European Commission. 2024. *EU Notifies Exit from Energy Charter Treaty and Puts an End to Intra-EU Arbitration Proceedings*. June 27. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3513.

Finer, Matt, Clinton N. Jenkins, Stuart L. Pimm, Brian Keane and Carl Ross. 2008. "Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity and Indigenous Peoples." *PLoS ONE* 3(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002932.

Flores, Bernardo M. et al. 2024. "Critical Transitions in the Amazon Forest System." *Nature* 626: 555–564.

Fossil Fuel Treaty Initiative. 2025. *Government of Colombia Announces First International Conference for the Phase-Out of Fossil Fuels in April 2026*. September 22. https://fossilfueltreaty.org/phase-out-conference.

Gelles, David. 2025. "The Country With Vast Rainforests—and a New, Thriving Oil Industry: An Interview with Mohamed Irfaan Ali, President of Guyana." *The New York Times*. September 19. https://www.nytimes.com/interactive/2025/09/19/magazine/irfaan-ali-guyana-climate-interview.html.

GOGEL. 2025. *Global Oil & Gas Exit List*. Urgewald. https://gogel.org/.

GOGET. 2025. *Global Oil and Gas Extraction Tracker*. Global Energy Monitor. https://globalenergymonitor.org/projects/global-oil-gas-extraction-tracker/.

Humphreys Bebbington, Denise, Ricardo Verdum, Cesar Gamboa and Anthony J. Bebbington. 2018. *Assessment and Scoping of Extractive Industries and Infrastructure in Relation to Deforestation: Amazonia*. Climate and Land Use Alliance. https://climateandlandusealliance.org/resources/amazonia-impacts-of-extractive-industry-and-infrastructure-on-forests/.

International Energy Agency. 2025. *Declines in Output from Existing Oil and Gas Fields Have Gathered Speed, with Implications for Markets and Energy Security*. September 16. https://www.iea.org/news/declines-in-output-from-existing-oil-and-gas-fields-have-gathered-speed-with-implications-for-markets-and-energy-security.

International Institute for Sustainable Development. 2022. *Investor–State Disputes in the Fossil Fuel Industry*. https://www.iisd.org/system/files/2022-01/investor%E2%80%93state-disputes-fossil-fuel-industry.pdf.

International Work Group on Indigenous Affairs. 2025. *Indigenous Peoples in Peru*. Accessed October 11, 2025. https://iwgia.org/en/peru.html.

Lessmann, Janeth, Javier Fajardo, Jesús Muñoz and Elisa Bonaccorso. 2016. "Large Expansion of Oil Industry in the Ecuadorian Amazon: Biodiversity Vulnerability and Conservation Alternatives." *Ecology and Evolution* 6(14): 4997–5012. https://doi.org/10.1002/ece3.2099.

Mataveli, Guilherme, Lucas Andrigo Maure, Alber Sanchez, Débora Joana Dutra, Gabriel de Oliveira, Matthew W. Jones, Cibele Amaral, Paulo Artaxo and Luiz E. Aragão. 2025. "Forest Degradation Is Undermining Progress on Deforestation in the Amazon." *Global Change Biology* 31(4). https://doi.org/10.1111/gcb.70209.

Mehranvar, Ladan and Martin Dietrich Brauch. 2024. *Breaking Free: Strategies for Governments on Terminating Investment Treaties and Removing ISDS Provisions*. Columbia Center on Sustainable Investment. https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=sustainable_investment.

Occidental v. Ecuador (II). 2012. *Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. Republic of Ecuador (II)* (ICSID Case No. ARB/06/11).

Offshore Technology. 2014. *Carabobo Oil Project*. March 6. https://www.offshore-technology.com/projects/carabobo-oil-project/.

Our World in Data. 2025. *Oil Proved Reserves*. Accessed October 11, 2025. https://ourworldindata.org/grapher/oil-proved-reserves?tab=table.

Paparinskis, Martins. 2021. "Crippling Compensation in the International Law Commission and Investor–State Arbitration." *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 37(1–2): 289–312. https://doi.org/10.1093/icsidreview/siab029.

Plant-for-the-Planet. 2025. *Plant-for-the-Planet's TFFF Watch Makes the New Global Forest Fund Transparent: Platform Tracks Which Countries Qualify for Payouts*. September 22. https://www.decadeonrestoration.org/plant-planets-tfff-watch-makes-new-global-forest-fund-transparent-platform-tracks-which-countries.

Ripinsky, Sergey. 2012. *Venezuela's Withdrawal From ICSID: What It Does and Does Not Achieve*. International Institute for Sustainable Development. April 13. https://www.iisd.org/itn/2012/04/13/venezuelas-withdrawal-from-icsid-what-it-does-and-does-not-achieve/.

Rockhopper v. Italy. 2022. *Rockhopper Exploration Plc, Rockhopper Italia S.p.A. and Rockhopper Mediterranean Ltd v. Italian Republic* (ICSID Case No. ARB/17/14).

Sanzillo, Tom. 2022. *Summary of IEEFA Report Findings: 2016 Petroleum Agreement Between Guyana, ExxonMobil et al*. Institute for Energy Economics and Financial Analysis. https://ieefa.org/sites/default/files/2022-05/Summary%20of%202016%20Petroleum%20Agreement%20Between%20Guyana%20and%20ExxonMobil_May%202022_0.pdf.

Science Panel for the Amazon. 2021. *Amazon Assessment Report 2021*. United Nations Sustainable Development Solutions Network, New York, USA. https://www.theamazonwewant.org/spa-reports/.

Tienhaara, Kyla. 2017. "Regulatory Chill in a Warming World: The Threat to Climate Policy Posed by Investor-State Dispute Settlement." *Transnational Environmental Law* 7(2): 229–250. https://doi.org/10.1017/s2047102517000309.

Boston University
53 Bay State Road
Boston, MA 02215

gdp@bu.edu
@GDP_Center
bu.edu/gdp



Tienhaara, Kyla, Rachel Thrasher, B. Alexander Simmons and Kevin P. Gallagher. 2022a. "Investor-State Disputes Threaten the Global Green Energy Transition." *Science* 376(6594): 701–703. https://doi.org/10.1126/science.abo4637.

Tienhaara, Kyla, Rachel Thrasher, B. Alexander Simmons and Kevin P. Gallagher. 2022b. "Investor-State Dispute Settlement: Obstructing a Just Energy Transition." *Climate Policy* 23(9): 1197–1212. https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2153102.

Tropical Forests Forever Facility. 2025. *Concept Note 3.0: An Innovative Financing Mechanism to Incentivize Long-Term Forest Conservation at Scale*. https://tfff.earth/wp-content/uploads/2025/08/TFFF-Concept-Note-3.0-202508-FINAL.pdf.

Tucker, Todd N. 2018. *Judge Knot: Politics and Development in International Investment Law*. London: Anthem Press.

UNCTAD. 2024. *Compensation and Damages in Investor-State Dispute Settlement Proceedings*. IIAs Issue Note. https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2024d3_en.pdf.

UNCTAD. 2025. *IIA Content Mapping*. Accessed October 10, 2025. https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/iia-mapping/Content.

Vaz, Ricardo. 2025. "Venezuela Loses Multi-Billion Dollar ConocoPhillips ICSID Appeal." *Venezuela Analysis*. January 26. https://venezuelanalysis.com/news/venezuela-loses-multi-billion-dollar-conocophillips-icsid-appeal.

World Bank. 2025. *The World Bank Group in Guyana*. Accessed October 11, 2025. https://www.worldbank.org/en/country/guyana/overview#:~:text=Real%20GDP%20is%20estimated%20to,support%20growth%20in%20other%20industries.



APÉNDICE I: PANORAMA GENERAL PAÍS POR PAÍS DE LA EXPOSICIÓN A LA SCIE

Bolivia



Número de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	5
Porcentaje de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	38 por ciento
Reservas cubiertas por la SCIE	389 millones de BPE
Número de acuerdos de inversión con SCIE	10 (todos rescindidos, pero en vigor debido a la cláusula de extinción)
Acuerdo de inversión aplicable a la mayoría de los proyectos de petróleo y gas	TBI Bolivia-Francia

La exposición de Bolivia a la SCIE es bastante limitada en escala, pero representa una parte razonablemente grande de su sector del petróleo y el gas. Bolivia limitó su futura exposición a la SCIE retirándose de sus TBI en la década de 2010, pero sus cláusulas de extinción aseguran que aún estén en vigor. Bolivia tiene proyectos de petróleo y gas que caen bajo sus TBI con Francia, Argentina y el Reino Unido, que expirarán en 2033, 2029 y 2034, respectivamente.

Brasil



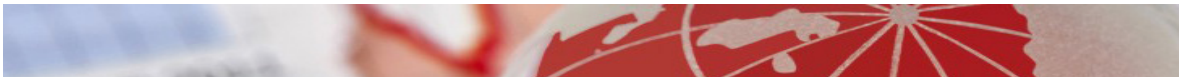
Número de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	0
Porcentaje de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	0 por ciento
Reservas cubiertas por la SCIE	0
Número de acuerdos de inversión con SCIE	0
Acuerdo de inversión aplicable a la mayoría de los proyectos de petróleo y gas	N/A

Debido a que el Congreso de Brasil impidió la entrada en vigor de los TBI firmados, Brasil no tiene exposición a la SCIE en el sector del petróleo y el gas. Su sector de petróleo y gas sigue siendo razonablemente grande, con 115 proyectos que aparecen en el *Global Oil and Gas Extraction Tracker*. Debido a la ausencia de SCIE en sus proyectos, Brasil es libre de perseguir la conservación de la selva amazónica y el desarrollo económico sin el riesgo de provocar reclamaciones de SCIE.

Colombia



Número de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	129
Porcentaje de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	45 por ciento
Reservas cubiertas por la SCIE	Mínimo 1.300 millones de BEP (probablemente muy subestimado debido a limitaciones de los datos)
Número de acuerdos de inversión con SCIE	15
Acuerdo de inversión aplicable a la mayoría de los proyectos de petróleo y gas	TLC Colombia-Canadá



Colombia se enfrenta a un amplio riesgo de la SCIE, con 129 proyectos de petróleo y gas propiedad de inversores que recurren a la SCIE. No pudimos encontrar información de reservas para el 85 por ciento de esos proyectos, por lo que los 1.300 millones de BEP confirmados de reservas cubiertas por SCIE se refieren a una cifra probablemente muy subestimada. La exposición de Colombia a la SCIE resulta particularmente riesgosa dada la postura crítica de su gobierno sobre los combustibles fósiles. El Presidente Petro ha cesado la emisión de nuevas licencias de petróleo y gas y ha abogado por la eliminación gradual de los combustibles fósiles (Fossil Fuel Treaty Initiative 2025). El 58 por ciento de la exposición a la SCIE en Colombia proviene del TLC Colombia-Canadá, mientras que sus TLC con Estados Unidos y Francia están en segunda y tercera posición.

Ecuador

Número de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	23
Porcentaje de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	26 por ciento
Reservas cubiertas por la SCIE	276 millones de BEP (probablemente subestimadas debido a limitaciones de los datos)
Número de acuerdos de inversión con SCIE	14 (todos rescindidos, pero en vigor debido a la cláusula de extinción)
Acuerdo de inversión aplicable a la mayoría de los proyectos de petróleo y gas	TBI China-Ecuador

La exposición a la SCIE en Ecuador es bastante significativa, cubriendo más de una cuarta parte de sus proyectos de petróleo y gas. La duración de esta exposición es limitada debido a la terminación por parte de Ecuador de sus TBI, pero sus cláusulas de extinción siguen vigentes. El TBI de Ecuador con China cubre el mayor número de proyectos, seguido de sus TBI con España y Estados Unidos. Estos TBI terminan formalmente en 2028, 2032 y 2038, respectivamente.

Guyana



Número de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	23
Porcentaje de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	96 por ciento
Reservas cubiertas por la SCIE	6 mil millones de BEP
Número de acuerdos de inversión con SCIE	5
Acuerdo de inversión aplicable a la mayoría de los proyectos de petróleo y gas	TBI China-Guyana

La exposición de Guyana a la SCIE es considerable, ya que cubre el 96 por ciento de sus proyectos de petróleo y gas y 6.000 millones de BEP (barril equivalente de petróleo). Sin embargo, esta exposición a la SCIE proviene enteramente de su TBI con China, y *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) tiene un 25 por ciento de interés en todos los proyectos de petróleo y gas de Guyana menos uno. En todos esos proyectos, Exxon y Hess mantienen el resto del interés de propiedad, pero la falta de un tratado de inversión de Guyana con los Estados Unidos impide que se presente la exposición a SCIE con esas empresas. Guyana ha dejado claro su compromiso con la extracción de petróleo y gas (Gelles 2025). Sin embargo, sus contratos de petróleo y gas han enfrentado fuertes críticas por unos términos financieros que son inusualmente favorables a las empresas extranjeras, y la SCIE podría limitar la capacidad de Guyana para aprovechar una participación más equitativa de los beneficios de sus recursos de hidrocarburos (Sanzillo 2022). Debido a que los proyectos de

petróleo y gas de Guyana son en gran parte marinos, hay una superposición limitada con su parte de la selva amazónica, aunque los combustibles fósiles extraídos en Guyana contribuirían en última instancia a las emisiones que dañan la Amazonía.

Perú



Número de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	8
Porcentaje de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	42 por ciento
Reservas cubiertas por la SCIE	565 mil millones de BEP
Número de acuerdos de inversión con SCIE	27
Acuerdo de inversión aplicable a la mayoría de los proyectos de petróleo y gas	TBI China-Perú

Si bien el Perú no es un productor de petróleo y gas particularmente grande en comparación con otros países de la Amazonía, su exposición a la SCIE sigue siendo significativa, con importantes consecuencias para la selva amazónica. Perú ocupa la segunda mayor parte de la Amazonía que cualquier país y sus proyectos de petróleo y gas tienen una extensa superposición geográfica con el bosque (International Work Group on Indigenous Affairs 2025). La proporción de sus proyectos de petróleo y gas vulnerables a la SCIE es también la tercera más alta de los países de la Amazonía. La mayor exposición de Perú a la SCIE en términos del número de proyectos se produce a través del acceso de *China National Petroleum Corporation* al TBI China-Perú, aunque las reservas son mayores bajo el acceso de PlusPetrol al TBI de Perú con los Países Bajos.

Suriname



Número de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	0
Porcentaje de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	0 por ciento
Reservas cubiertas por la SCIE	0
Número de acuerdos de inversión con SCIE	1
Acuerdo de inversión aplicable a la mayoría de los proyectos de petróleo y gas	N/A

Suriname no está expuesto a la SCIE en su sector del petróleo y el gas. Suriname sólo tiene un tratado de inversión. Este tratado es con los Países Bajos, y en la actualidad las empresas neerlandesas no tienen intereses de propiedad en los proyectos de petróleo y gas de Suriname. El sector del petróleo y el gas de Suriname es bastante incipiente y en gran parte en alta mar.

Venezuela



Número de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	30
Porcentaje de proyectos de petróleo y gas cubiertos por la SCIE	21 por ciento
Reservas cubiertas por la SCIE	18 mil millones de BEP
Número de acuerdos de inversión con SCIE	24
Acuerdo de inversión aplicable a la mayoría de los proyectos de petróleo y gas	TBI España-Venezuela

Venezuela está altamente expuesta a la SCIE en su sector del petróleo y el gas. Si bien su exposición está algo limitada por la participación mayoritaria de la empresa estatal PDVSA en los proyectos, las empresas extranjeras tienen una participación minoritaria en muchos proyectos y Venezuela tiene una extensa red de acuerdos de inversión. Venezuela se ha retirado del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) pero sigue siendo vulnerable a casos de SCIE en otros foros (Ripinsky 2012). La vulnerabilidad de Venezuela a las responsabilidades legales por la SCIE se muestra evidente por los 8.500 millones de dólares que se le ha ordenado pagar a ConocoPhillips por un litigio relacionado con las reformas del sector petrolero en 2007 (ConocoPhillips contra Venezuela; Vaz 2025). Como el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, no es sorprendente que las reservas expuestas por la SCIE en Venezuela sean muy grandes, aunque la producción petrolera de Venezuela es muy baja en relación con sus reservas (Our World in Data 2025; Aray 2024). El sector petrolero de Venezuela también está fuertemente moldeado por su dinámica situación política única, incluyendo sanciones al país. Mientras que el TBI de Venezuela con España se aplica al mayor número de proyectos, de los 18 mil millones de BEP de Venezuela de reservas expuestas a SCIE, 13 mil millones provienen del 40 por ciento de interés de Rosneft en Carabobo-2, que genera responsabilidad legal por la SCIE bajo el tratado de inversión de Venezuela con Rusia. Otras fuentes también han identificado a Carabobo-2 como un proyecto muy grande (Offshore Technology 2014), pero cabe destacar que nuestra cifra es una "estimación de reservas geológicas", ya que Carabobo-2 fue uno de un número limitado de proyectos donde la base de datos carecía de una categoría más precisa sobre reservas.

APÉNDICE II: METODOLOGÍA

Este informe de políticas se basa en los datos del Rastreador global de extracción de petróleo y gas (*Global Oil and Gas Extraction Tracker*, GOGET), como parte del *Global Energy Monitor*, sobre ocho países de la Amazonía, utilizando los datos disponibles a mediados de 2025 (GOGET 2025). Hemos identificado el país de cada empresa registrada como propietaria en GOGET, confiando en la medida de lo posible en la base de datos pública conocida como la Lista Global de Salidas de Petróleo y Gas (*Global Oil & Gas Exit List*, GOGEL) sobre los países sede, y cuando esta información no estaba disponible en GOGEL (GOGEL 2025), fue complementada con más búsquedas en internet.

De los proyectos de petróleo y gas registrados en GOGET en los países de la Amazonía, en el 10 por ciento faltaba información sobre el propietario y el operador del proyecto, en el 45 por ciento se enumeraba al operador de un proyecto, pero no a su propietario y en el 1 por ciento se enumeraba alguna información sobre los propietarios, aunque incompleta. Para el 45 por ciento de los proyectos con datos del operador, pero sin datos del propietario, nuestro análisis consideró al operador como el propietario completo del proyecto. Hicimos esta suposición porque los operadores casi siempre tienen una participación en la propiedad en un proyecto, y este fue el caso del 95 por ciento de los proyectos en GOGET en países de la Amazonía que incluían datos completos de operador y propiedad. Sin embargo, el operador es a menudo uno de varios propietarios de un proyecto, y nuestro enfoque no daría cuenta entonces de esos otros propietarios. Debido a que esas otras compañías a menudo no tienen la misma nacionalidad que el operador —y por lo tanto podrían estar cubiertas por otros tratados de inversión— nuestros hallazgos probablemente subestiman la escala de exposición de SCIE en los países de la Amazonía.

Una vez que identificamos qué proyectos en GOGET tenían propietarios extranjeros, comparamos estos proyectos con una lista de los acuerdos internacionales de inversión, AII, de los países de la Amazonía (UNCTAD 2025). Cuando una empresa propietaria tenía su sede en un país que tenía un tratado de inversión que incluía disposiciones de la SCIE con el país donde se encontraba el proyecto de petróleo o gas, contamos este proyecto como expuesto a SCIE.

Para calcular las reservas de los proyectos cubiertos por la SCIE, nos basamos en los datos de reservas disponibles en GOGET. Cuando se disponía de múltiples cifras de reservas para un proyecto determinado, nos basamos en la estimación que identificaba con mayor precisión las reservas que probablemente serían viables desde el punto de vista comercial. Por ejemplo, elegimos una cifra de "reservas probadas" antes que una cifra de "reservas probables" y una cifra de "reservas" antes que cifras de "recursos" o "volumen en el lugar". Cuando sólo había una diferencia marginal entre la precisión de dos cifras y una era más reciente, utilizamos la cifra más reciente. Luego, para el caso de un proyecto con múltiples propietarios, sólo contaríamos la participación de reservas equivalente a las acciones de propiedad de la empresa con recurso a la SCIE. Para las reservas de gas, convertimos metros cúbicos en barriles equivalentes de petróleo, BEP, utilizando un factor de conversión de 0,005883 (BP 2021).

Infortunadamente, el GOGET no tenía datos de reservas para algunos proyectos, particularmente en Ecuador y Colombia, y para este último sólo tenía datos de reservas disponibles para el 15 por ciento de sus proyectos cubiertos por la SCIE. Dada nuestra incapacidad para atribuir reservas a un número significativo de proyectos cubiertos por la SCIE, nuestras cifras sobre las reservas cubiertas por la SCIE deben considerarse como cifras mínimas que expresan las reservas de cada proyecto con los datos disponibles, en lugar de cifras exhaustivas sobre la escala de reservas expuestas a la SCIE en los países de la Amazonía.



BU Global Development Policy Center

Boston University
53 Bay State Road
Boston, MA 02215

gdp@bu.edu
@GDP_Center
bu.edu/gdp



The Global Economic Governance Initiative (GEGI) is a research initiative at Boston University Global Development Policy Center. The GDP Center is a University wide center in partnership with the Frederick S. Pardee School for Global Studies. The Center's mission is to advance policy-oriented research for financial stability, human wellbeing, and environmental sustainability.

www.bu.edu/gdp

The views expressed in this Policy Brief are strictly those of the author(s) and do not represent the position of Boston University, or the Global Development Policy Center.

